

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por los CC. Alvarez Araujo y C^a, Francisco Martinez Negrete y C^a, R. Miravete, Otting Riensch, Mauricio Rohde, Fernandez Somellera Hermanos, Angel B. y Puga y T. I. Kunhardt, contra el cobro que les hace el Gobierno del Estado, del derecho de uno y medio por ciento, por la extraccion de numerario.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice: D. Antonio Alvarez del Castillo y otros comerciantes, piden por tercera vez amparo contra el cobro que por decretos del Estado, se les hace del uno y medio por ciento por extraccion de caudales, y con motivo de la conducta que saldrá de esta capital el 12 del corriente; consideran dicho cobro, contrario á la fraccion 1^a del artículo 112 de la Constitucion, y con su apoyo y de la fraccion 1^a artículo 1^o de la ley de 20 de Enero de 1869, solicitan la intervencion de la Justicia federal, de la que han obtenido ya la suspension del acto que reclaman.

El Juzgado conoce ya el parecer del suscrito: ha sido contrario á la intencion de los peticionarios, y no hay motivo porque haya cambiado. Creo como antes el Promotor, que no se oponen á la fraccion 1^a del artículo 112 constitucional, los decretos del Estado que imponen el uno y medio por ciento á los caudales que pasan de su territorio á otro de la misma República, y no van directamente fuera de ella; porque aquella fraccion prohibitoria, se refiere á derechos sobre exportaciones, á que no se grave el comercio extranjero sin permiso del Congreso de la Union, mientras que estos decretos, sin invadir el terreno vedado por la Constitucion, gravan únicamente el tráfico interior.

Cierto es que los comerciantes de esta

Ciudad, aun con relacion á los caudales que pongan en conducta para que sean embarcados por el puerto mas retirado del territorio de Jalisco, pueden manifestar ante la Gefatura de Hacienda, su intencion de exportarlos y afianzar dicha intencion con el pago de los derechos federales respectivos; pero esto no quita ni impide, que antes de que verifiquen la exportacion al extranjero puedan tambien ejecutar y realmente ejecuten varias operaciones mercantiles de pago, cambio, situacion etc. en diferentes ciudades mexicanas, operaciones que pertenecen todas al comercio interior, sobre el que tienen los Estados plena é indispensable facultad para imponer los derechos que crean oportunos, sin necesidad de permiso del legislativo de la Union.

Para concluir, el Promotor se refiere nuevamente á sus respuestas en los juicios anteriores y á los informes de la Administracion de rentas del Estado en dichos juicios y el presente, concluyendo con pedir: que la Justicia de la Union no ampare ni proteja á los peticionarios contra el cobro de que se quejan.

Guadalajara, 9 de Mayo de 1874.—
Firmado.—A. Camarena.

Es copia. Guadalajara, 9 de Mayo de 1874.—A. Camarena.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, 5 de Junio de 1874.—Vistos: los CC. Alvarez Araujo y C^a, Otting y C^a, Francisco Martinez Negrete y C^a, R. Miravete, Otting Riensch, Mauricio Rohde, Fernandez Somellera Hermanos, Angel B. Puga y T. I. Kunhardt, entablaron ante este Juzgado, juicio de amparo y proteccion de garantías, fundándose en la fraccion 3^a artículo 1^o de la ley de 20 de Enero de 1869 contra el ejecutor de las leyes del Estado, que imponen el uno y medio por ciento sobre la extraccion de plata acuñada, en conducta ordinaria, fundándose en que habien-

do sacado guía de exportacion, de la Gefatura Superior de Hacienda del Estado, y pagado el cinco por ciento con arreglo al arancel de Aduanas marítimas, debe satisfacer á la Federacion, por tratarse de conducta de comercio exterior, las autoridades del Estado no han podido reagrar los derechos satisfechos de exportacion por prohibirlo la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitucion general.

Pidieron tambien los interesados la suspension del acto reclamado por considerarla urgente, al tenor que salir la conducta el dia 12 del mes próximo pasado y sufrir perjuicio si se les obliga á pagar el uno y medio por ciento impuesto por las leyes del Estado. Sustanciada esta peticion en que se observaron todos los trámites de la ley, se decretó de conformidad por los perjuicios irreparables que visiblemente se seguirían á los interesados.

Se pidió al C. Administrador de rentas, como ejecutor del acto reclamado y conforme al artículo 9 de la ley de 20 de Enero de 1869, informe con justificacion sobre los hechos en que se funda el escrito en que se pide amparo; lo evacuó, alegando distintas razones, concluyendo con los párrafos numerados que siguen.

“Primero: porque en ellos se ponen caudales de personas, que no comercian con el extranjero.”

“Segundo: porque en la última principalmente, se ha remitido como una 3ª parte en moneda menuda, llamada morralla, especie que no se exporta como es notorio, porque no tiene aceptacion en los mercados extranjeros.”

“Tercero: porque las guías, aunque pedidas para Veracruz en la última conducta, los caudales de algunos han quedado en México, puesto que de allí han venido las tornaguías.”

“Cuarto: porque el pago de los derechos de exportacion anticipado y los documentos salvo-conductos que las Gefaturas expidan, no embarazan quedar en el camino los efectos.”

“Quinto: porque aun ese mismo pago de derechos no es otra cosa en realidad, que una operacion de intereses acumulada al precio en que los dueños venden su dinero en las plazas donde tienen demanda; pero que en manera alguna el pago puede ser una prueba de que las conductas de caudales lleguen á los embarcaderos, tales como del interior salen.”

Recibido el negocio á prueba, el representante de los interesados promovió se librara oficio á la Gefatura Superior de Hacienda, á fin de que certificara haber expedido guías de exportacion, previo el pago del derecho de cinco por ciento á las casas que han solicitado el amparo y que son las siguientes: Otting y Cª, Francisco Martinez Negrete y Cª, R. Miravete, Otting Riensch y Cª, Mauricio Rohde, Fernandez Somellera Hermanos, Angel B. y Puga, T. I. Kunhardt y Alvarez Araujo y Compañía. El C. Gefe de Hacienda, como resultado del oficio que por este Juzgado se le libró, remitió un estado que manifiesta las guías expedidas por aquella Gefatura, para la conducta de caudales que salió de esta Ciudad con direccion al puerto de Veracruz el 12 de Mayo último y la que se agregó á fojas 17 de este expediente.

Este Juzgado considerando: Primero: que está justificado en autos, con el estado que remitió el C. Gefe Superior de Hacienda del Estado, á peticion de los interesados, que la conducta salida de esta Capital para Veracruz, el dia 12 del mes próximo pasado, vá con el objeto de ser exportada.

Segundo: que el artículo 112 de la Constitucion es tan claro, que basta el sentido comun para ser entendido, pues su tenor literal es: “Tampoco pueden (los Estados) sin consentimiento de la Union: I “Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puerto, ni imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones.”

Tercero: que estaría por demás la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitucion general, si no tuviera la interpretacion que

ya le dió una sentencia pronunciada por la Suprema Corte en caso idéntico.

Cuarto: que esa ejecutoria no ha sido recibida en la opinion pública como un ataque á la soberanía de los Estados; pues la prensa independiente, no ha llegado á hacer tal calificación.

Quinto: que la disposicion que contiene el artículo 112 de la Constitucion de 1857 no fué una invencion de los constituyentes de ese año, sino que figura tambien en la Constitucion de 1824; cuya fraccion dice: "Ninguno de los Estados podrá imponer sin consentimiento del Congreso general, contribuciones ó derechos sobre exportaciones mientras la ley no arregle como deben hacerlo."

Los Estados en aquella época, entendieron esa fraccion en su sentido legal y no llegaron á inventar otra palabra para eludir; por tales consideraciones, y apoyado este Juzgado en la ley de 20 de Enero de 1869, falla con las proposiciones siguientes.

Primera: la Justicia de la Union ampara y protege á las casas de comercio que sacan guías en la Jefatura de Hacienda de esta Capital el dia 11 de Mayo último para exportar por el puerto de Veracruz, siendo estos: los Sres. Alvarez Araujo y C^a, Otting y C^a, R. Miravete, Otting Riensch, Mauricio Rohde, Fernandez Somellera Hermanos, Angel B. y Puga, T. I. Kunhardt y F. Martinez Negrete y C^a.

Segunda: notifíquese; publíquese y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito lo sentenció y firmó.—
D. I. Trejo.—G. J. Gallegos.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, 2 de Julio de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por los CC. Alvarez Araujo y C^a, Francisco Martinez Negrete y

C^a, R. Miravete, Otting Riensch, Mauricio Rohde, Fernandez Somellera Hermanos, Angel B. y Puga y T. I. Kunhardt, contra el cobro que les hace el Gobierno del Estado, del derecho de uno y medio por ciento, por la extraccion del numerario que tenian que remitir para su exportacion en la conducta que debería salir de Guadalajara para el Manzanillo, el dia 12 del pasado Mayo; cuyo impuesto establecido por decreto de la Legislatura del Estado, con fecha de 31 de Mayo de 1872, número 297, y modificado por la ley número 357, es anticonstitucional, por invadir la esfera de la autoridad federal, con violacion del artículo 172 fraccion 1^a de la Carta fundamental de la República, exigiéndose como se exige el pago de ese impuesto, sobre moneda destinada á la exportacion, y considerando:

Primero: que el referido impuesto de uno y medio por ciento, llamado de extraccion, cuando recae sobre los caudales puestos en una conducta con destino al extranjero, á cuyo efecto han pagado ya á la Hacienda federal el cinco por ciento de exportacion y obtenido las correspondientes guías con escala ó sin ella, se convierte necesariamente en un verdadero derecho de exportacion que el Estado cobra sin el consentimiento del Congreso de la Union, como lo requiere la fraccion 1^a artículo 112 de la Constitucion general.

Segundo: que ademas de esto, la moneda aunque bajo ciertos respectos, es una mercancía igual á cualquiera otra y sujeta á las mismas leyes y principios que todas en su produccion y consumo, como lo acreditan las sanas teorías de la ciencia económica, bajo otros, conforme á las leyes fundamentales del país, se considera y debe considerarse, como una mercancía especialísima que por lo mismo debe estar sujeta á leyes y condiciones tambien especiales.

Tercero: que bajo este respecto, la moneda en el régimen de Gobierno que tiene adoptado la República, ha estado siempre sujeta en su produccion, circulacion y ex-

traccion ó exportacion, á las leyes federales, y es conveniente que así se verifique, en interes de toda la República, que se perjudicaría notablemente si á cada uno de los Estados de la Federacion fuera lícito establecer reglas sobre su produccion, circulacion y exportacion.

Cuarto: que la necesidad de conservar el valor de la moneda, como una mercancía universal, indispensable para realizar toda clase de transacciones mercantiles entre los diferentes pueblos de la tierra, al abrigo de alteraciones caprichosas y bajo la influencia de leyes uniformes, ha hecho que esta materia se someta á convenciones especiales entre las naciones, poniéndola bajo la proteccion del derecho internacional.

Quinto: que el Gobierno de la República á quien competía celebrar una convencion de esta especie, en el caso de que así pareciera útil á los intereses mercantiles de la misma República, no podía hacerlo, si cada Estado de la Federacion tuviera libertad de gravar la circulacion de la moneda cualquiera que fuera la forma y el nombre de ese gravámen, que en último análisis vendría á producir alteraciones en el valor de la misma moneda.

Sexto: que por estas razones, el Gobierno del Estado de Jalisco ha sido incompetente para gravar los caudales extraídos fuera de su territorio, con un derecho, cualquiera que sea su denominacion y carácter.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 72 fracción 23, 112 fracción 1ª, se decretar que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guadalajara, en 5 de Junio del presente año en que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á las casas de comercio que sacaron guías en la Jefatura de Hacienda de dicha Ciudad de Guadalajara el día 11 de Mayo último, para exportar por el puerto de Veracruz, siendo estos: los Sres. Alvarez Araujo y Cª, Otting y Cª, R. Miravete, Otting Riensch, Mauricio Rohde, Fer-

nandez Somellera Hermanos, Angel B. y Puga, T. I. Kunhardt y Francisco Martinez Negrete y Cª.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José María Iglesias.—Miguel Auza.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José G. Ramirez.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Agosto de 1874.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por la Sra. Dª María Concepcion Gutierrez, como albacea de la testamentaria de D. Rafael Martinez Perea, contra el C. Recaudador de contribuciones de la misma Ciudad, que mandó retazar la casa número 7 de la calle de la Alhondiga para cubrir un adeudo de contribuciones.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que al evacuar el traslado que en este juicio se le corrió y se ve á fojas 10, se impuso detenidamente del escrito de queja, y se convenció de que el objeto de este amparo, no era otro que la retaza de la finca embargada, y por tanto se ocupó de ese punto único, esencial, que